



E

Editorial

Política por sobre la reconstrucción

Cuando las cifras avanzan y los hogares no, nos damos cuenta de que aunque el incendio ya pasó, la deuda jamás será saldada.

La última sesión de la Comisión Especial Investigadora sobre la reconstrucción tras el megaincendio se transformó en un reflejo nítido de las tensiones políticas que hoy atraviesan al Congreso y al Ejecutivo. Si bien los ministros Carlos Montes y Javiera Toro no estuvieron presentes, sus nombres dominaron el debate, en un informe que, aunque recogió críticas transversales sobre la lentitud y deficiencias en la reconstrucción, terminó empantanado en la pugna por la responsabilidad política.

El diagnóstico de la comisión es claro: los avances son insuficientes frente a la magnitud del desastre. Miles de familias siguen sin una solución definitiva, la ejecución presupuestaria es baja y la construcción de viviendas apenas despega. Son datos duros, que debiesen motivar autocrítica y mayor eficiencia en la acción estatal. Sin embargo, el debate se desvió hacia la destitución de autoridades, petición levantada por la oposición y rechazada por la mayoría oficialista. Así, la discusión terminó más centrada en los cargos que en las soluciones.

El oficialismo acusa revanchismo político; la oposición, encubrimiento de errores. Lo cierto es que las víctimas del incendio siguen esperando respuestas concretas. En medio del cruce de recriminaciones, el drama humano corre el riesgo de diluirse en cálculos partidistas. La reconstrucción, como bien señaló el propio informe, requiere liderazgo, coordinación y transparencia. Nada de eso se garantiza con un clima de confrontación permanente.

La tarea pendiente es inmensa: más de 900 familias aún sin acceso a subsidio y apenas un puñado de viviendas terminadas después de un año y medio. El Estado no puede seguir comunicando cifras sin respaldo ni cayendo en la autocomplacencia. Tampoco la oposición puede reducir la tragedia a una oportunidad de desgaste político.

El país demanda que gobierno y oposición asuman que la reconstrucción no es un botín electoral, sino una obligación moral y política. La verdadera medida del éxito no será quién gane la pelea en la Cámara, sino cuándo los damnificados puedan finalmente volver a tener un hogar digno.